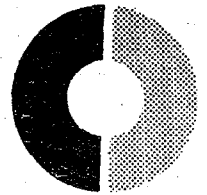


Fiel reflejo del proceso vertebrador del actual partido del Gobierno, a partir de la coalición electoral que se alzó con el triunfo en las elecciones de junio de 1977, las disidencias en el seno de UCD alcanzaron su máximo desarrollo hasta que la designación, de Rafael Arias-Salgado para el cargo de secretario general sancionó la inclinación de la dirección presidencialista por el ala socialdemócrata, como paso previo a la celebración del primer congreso. No obstante, las sucesivas declaraciones políticas del Partido han evitado cualquier definición que conllevara la exclusión de las otras tendencias, liberales o democristianas, que integraban la coalición primitiva.



Convivencia de liberales socialdemócratas y cristianos

A diferencia del PCE, e incluso del PSOE, aunque en menor medida, las disensiones dentro de UCD no se han substancializado en debates sobre cuestiones programáticas o de definición ideológica. Luchas intestinas por el control de los puestos de responsabilidad, problemas organizativos o de política concreta han servido de cauce de expresión a conflictos entre tendencias que han llegado incluso a paralizar la vida de un partido legalizado, como tal, en agosto de 1977.

La intervención directa de Adolfo Suárez, su inclinación por una u otra tendencia ha sido, en definitiva, el hecho decisivo para la superación de estos momentos de «impasse». La supremacía de la Moncloa sería recogida más tarde por el congreso, bajo la forma estatutaria de una «dirección presidencialista».

Concluido el paréntesis veraniego, los pactos de la Moncloa sirvieron de ocasión para que saltara la primera señal de alarma. Era un 24 de octubre de 1977, cuando se celebraron en Madrid dos cenas simultáneas, que, pese a su carácter aparentemente privado, no escaparon a la atención de los obser-

vadores. Cenaron los «laicos» por un lado. Fernández Ordóñez, Garrigues, liberales y socialdemócratas. Por otro, los democristianos, con Alvarez de Miranda a la cabeza, secundado por los antiguos «tácitos», Alfonso Osorio y José Luis Alvarez.

Las jornadas precedentes habían quedado marcadas por un fuerte movimiento crítico, desde los sectores más conservadores de la democracia cristiana, a la gestión de Fernández Ordóñez, que ya anunciaba la reforma fiscal, a Abril Martorell, y sus preferencias por un sindicalismo pluralista, y a Jiménez de Parga que, desde el Ministerio de Trabajo, hablaba de «cogestión», y cantaba las excelencias de Comisiones Obreras.

Suárez desde su atalaya, intentaba conjugar las tareas del Gobierno con la vigilancia de estos movimientos, del acercamiento de Alvarez de Miranda a la internacional democristiana, y de las primeras ofertas socialistas de un Gobierno de coalición, formuladas bajo manga a algunos de sus ministros.

El 2 de diciembre reúne el comité político, y, con el apoyo de los liberales,

que dominaban la primera ejecutiva, designada dos meses antes, decreta un ultimatum de ocho días para que los doce partidos integrantes de la coalición se disuelvan e incorporen definitivamente a la Unión.

Todas las formaciones se avinieron finalmente a los dictados de la dirección, con la excepción de la Federación Socialdemócrata de Lasuén quien, sin embargo, no abandonó el partido del Gobierno, y del PDP de Ignacio Camuñas, que se negó «provisionalmente» a disolverse, aunque lo hizo días más tarde.

Mientras que los conflictos periféricos relacionados con el tema de las autonomías habían comenzado ya de forma notoria en Valencia, y en Madrid se llegaba a una fórmula de compromiso por la que se otorgaba la presidencia del comité regional al democristiano José Luis Alvarez, en tanto que el socialdemócrata Armando Benito ocupaba la secretaría, Alfonso Osorio, ex asesor de la presidencia, abandona el partido. UCD informó en su momento de que Osorio no había aceptado la disolución del PDC, ni se había integrado en el nuevo partido.

Pero es precisamente la remodelación ministerial del 2 de marzo, la que abre la crisis más grave que ha conocido hasta ahora el partido del Gobierno, al dejar abierta la sucesión del secretario de organización, Sanchez Terán, que pasó a ocupar la cartera de Transportes. Arturo Moya, por los socialdemócratas, y Herrero del Miñón o Javier Tusell, por los democristianos se perfilaron como primeros candidatos. Dos días antes, José Luis Alvarez había sido nombrado alcalde de Madrid, y Herrero del Miñón le sustituyó como presidente en funciones de la ejecutiva-centro.

La crisis, que habría de durar dos meses, conoce otros incidentes como la salida del socialdemócrata Gonzalo Casado, miembro del comité ejecutivo, y presunto candidato a la cartera de Justicia, cuando se pensó que Landelino Lavilla podría pasar a ocuparse de la secretaría del partido.

El paréntesis se cierra el 12 de mayo de 1978 con la designación de Arias-Salgado como nuevo «coordinador general». Dos días más tarde, el liberal Luis Ortiz es nombrado presidente del comité de Madrid. Los hechos anuncian la ten-

dencia que habrá de imponerse en el primer congreso del partido, que comienza a prepararse.

Conflictos autonómicos

Las asambleas provinciales registran enfrentamientos, sobre todo en Málaga y Asturias, que se saldan en beneficio del ala socialdemócrata. Otro es el caso de las provincias con reivindicaciones autonómicas propias, en las que el apoyo de la dirección central a los elementos más conservadores ha creado graves problemas, que aún hoy siguen sin resolverse. Las mismas protestas y dimisiones en cadena que acompañaron en su día los nombramientos de presidentes a las juntas de Galicia, Valencia, y Canarias han vuelto a reproducirse ahora con motivo de la confección de listas electorales en esas provincias.

Otras dimisiones y expulsiones de signo contrario, por cuanto que los afectados han sido elementos conservadores, se han producido, también en relación con el tema de las autonomías en Navarra (caso Aizpun) y Santander (expedientes de expulsión a los senadores Pinal y José Mario González).